



***DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN***  
***TRIBUNAL SUPERIOR SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL***  
***MAGISTRADA PONENTE: PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA***  
***"Al servicio de la justicia***  
***y de la paz social"***

**S – 19**

**Procedimiento:** Ejecutivo

**Demandante:** Lycée Francais Medellín S.A.S

**Demandados:** Salim Munir Zakzuk Daguer

**Radicado Único Nacional:** 05266 31 03 002 2022 00114 01

**Procedencia:** Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Envigado

**Decisión:** Confirma providencia apelada

Medellín, veintiuno (21) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

**Cuestión:** Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la **parte demandada**, en contra de la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2022, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Envigado.

**Temas:** negocio causal, ratificación de contrato, reconocimiento de deuda.

## **ANTECEDENTES**

Procedente del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Envigado, por virtud de la apelación interpuesta por la parte demandada en contra de la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2022, ha llegado a esta Corporación el proceso ejecutivo promovido por el Lycée Francais Medellín S.A.S (en adelante el Colegio) en contra de Salim Munir Zakzuk Daguer (en adelante el señor Salim), en el cual la parte demandante pretendió en su momento que se librara mandamiento de pago en contra del aquí demandado de la siguiente manera:

*"1. Por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO (\$42.625.765) PESOS, contenida en el pagare N° 310 por concepto de capital, suscrito el día 29 de junio de 2018.*

*2. Por la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CATORCE (\$45.932.514) PESOS, contenida en el pagare N° 311 por concepto de capital, suscrito el día 29 de junio de 2018.*

*3. Por la suma de CUARENTA Y UN MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES (\$41.073.593) PESOS, contenida en el pagare N° 312 por concepto de capital, suscrito el día 29 de junio de 2018.*

*4. Por los intereses moratorias sobre la anterior suma de dinero desde el día en que se hizo exigible la obligación, vale decir desde el día treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021) y hasta el momento en que se verifique el pago total de la misma; liquidados a la tasa más alta permitida por la ley para el caso que nos ocupa, tasa que la tiene estipulada el artículo 884 del Código de Comercio en una y media veces el interés bancario corriente". (sic fls. 4-5 pdf 02)*

Todo lo antedicho, con fundamento en hechos que así se compendian:

Que entre la parte demandante y el señor Salim, padre de 3 "educandos", se suscribió un contrato de prestación de servicios, cuyo objeto fue "(L)a prestación de servicios educativos"(sic hecho 1º de la demanda). Luego, para respaldar las obligaciones emanadas de ese acuerdo, el demandado

*"suscribió el día 29 de junio de 2018 en favor de mi representado tres (3) títulos de valor pagaré N° 310, 311, 312 en blanco, cada uno con carta de instrucciones; los pagarés se completaron el 30 de junio de 2021; el pagare N° 310 por un valor de CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO (\$42.625.765)PESOS; el pagare N° 311 por un valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CATORCE (\$45.932.514)PESOS; y el pagare N° 312 por un valor de*

*CUARENTA Y UN MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES(\$41.073.593) PESOS”(sic hecho 2º demanda)*

Que con los pagarés también se firmaron sendas cartas de instrucciones y se estipuló el pago de intereses moratorios a la tasa máxima permitida, mismos que se deben porque el demandado no ha procedido con el pago de las sumas adeudadas, muy a pesar de que renunció a todo requerimiento legal.

## **RÉPLICA**

El Juzgado de origen libró mandamiento de pago en la forma que lo estimó procedente por auto fechado el 9 de mayo de 2022 (pdf 06). Por tanto, notificada la parte demandada, procedió a contestar de la siguiente manera **(pdf 15)**.

Comenzó manifestando que en efecto había celebrado con la demandante un contrato para la prestación de servicios educativos, pero este terminó el 30 de julio de 2019 con ocasión de un mensaje de correo electrónico que el señor Salim envió y la institución educativa aceptó, con lo cual quedaron también “revocados” los pagarés.

Por ende, el demandado aseguró que en realidad sí había pagado las sumas adeudadas a la institución demandante, pero hasta el momento en el que les notificó su intención de terminar el contrato de prestación de servicios educativos. Luego, cualquier suma que corresponda a período posterior no es exigible. Lo anterior, porque

*"En efecto, el señor SALIM ZUKZUK suscribió los pagarés base de la ejecución, no obstante por diferentes razones de orden personal, debió terminar el contrato de matrícula de sus hijos en el colegio y con ello revocar los pagarés suscritos, para lo cual previo a notificar dicha decisión a la institución educativa, lo primero que hizo fue ponerse al día en las obligaciones, posteriormente y de manera oficial notificar la cancelación de la matrícula a la institución educativa, notificación que además de recibida fue aceptada por el colegio, al punto que le hicieron la devolución del último pago realizado, solicitud que hacía también parte del correo de terminación del mencionado contrato.*

*Mediante correo electrónico enviado a la dirección TESORERÍA@LF.COM.CO el día 30 de julio de 2019 a las 11:19 horas, el señor SALIM MUNIR ZAKZUK DAGUER en un mensaje que denominó "DEVOLUCIÓN MATRICULA", notificó a la institución educativa en su calidad de padre y responsable de los pagos de los menores, que no continuaría con el proceso de matrícula de sus hijos, al paso que solicitó el reembolso de los valores que para ese momento fueron debitados de su tarjeta de crédito.*

*Además de haber enviado el correo de cancelación, el aquí demandado también estableció comunicación con el señor Juan Naranjo Gerente del Colegio vía WhatsApp, en la que:*

- Informó la decisión de cancelar de la matricula*
- Solicitó la devolución de los dineros debitados*
- Reenvió por ese medio el correo de cancelación enviado a la Tesorería*

*Luego de dicho cruce de información, el Gerente del Colegio dio respuesta informando que Davivienda reversaría la operación y que ello tomaría 3 días.*

*Posterior a dicha conversación y conforme lo informó el señor Naranjo, Gerente del Colegio, en los días siguientes se hizo al señor Zakzuk la devolución de los dineros cobrados, con lo cual se aceptó la notificación de realizada por el padre de los menores, de no continuar el proceso de matrícula, por lo que no puede bajo ningún argumento el colegio, exculparse de no haber sido oportunamente informado de dicha decisión”(fls 4-6 pdf 15)*

Con base en lo antedicho, propuso las que nominó “excepciones” de revocatoria de la promesa de pagar una suma de dinero” “ausencia de exigibilidad del título valor / extinción de la obligación”, “pago total de la obligación adeudada”, “terminación previa del negocio causal”, “falta de legitimación por pasiva” y “mala fe y temeridad de la parte demandante”.

## **SENTENCIA IMPUGNADA**

Trabada la relación procesal se dictó sentencia en la que se resolvió:

*"1º. Ordenar seguir adelante la ejecución a favor del Lycée Francais Medellín S.A.S. en contra del señor Salim Munir Zakzuk Daguer para que con el producto de los bienes embargados, secuestrados y valuados se pague el capital, sus intereses y las costas de este proceso.*

*2º. Declarar impróspera las excepciones*

*3º. Se condena en costas a la demandada a liquidar por secretaría, inclúyanse por agencias en derecho la suma de seis millones de pesos (\$6.000.000).*

*4º. Autorizar a las partes para que a la ejecutoria de la presente decisión se liquide el crédito en la forma prevista en el artículo 446 del Código General del Proceso."*

Para decidir de la manera como lo hizo, el *a-quo* partió afirmando que debía resolver sobre la procedencia de la ejecución, la cual se inició con base en unos pagarés que cumplen con todos los requisitos formales. Además, el demandado los suscribió en blanco como garantía de un contrato de prestación de servicios educativos ante cuyo impago fueron llenados.

El demandado, por su parte, se opuso alegando que ya había revocado la promesa de pagar la suma de dinero y con base en ello propuso las respectivas excepciones, pero no puso en duda la suscripción de los pagarés, tampoco los montos, pues su defensa se sustentó en que: i) ese contrato terminó por comunicación del 30 de julio de 2019 enviada al colegio mediante correo electrónico, misma que supuestamente fue aceptada por parte de la institución educativa; ii) habló con el señor Juan Naranjo vía chat para solicitar la devolución del dinero pagado por concepto de matrícula, lo cual en efecto ocurrió; iii) luego de la cancelación de los servicios, la demandante no renovó la documentación a nombre de la madre de los menores, quien los matriculó, y por ende ella fue la que incurrió en mora, pero la parte demandante simplemente utilizó unos documentos ya revocados para presentar la demanda.

A partir de lo anterior el Juez demarcó el escenario o problema jurídico, porque el colegio replicó afirmando que los tres menores siempre fueron enviados a cumplir con su jornada de estudio, y el demandado solicitó incluso un estado de cuenta por un saldo superior a los \$220.000.000 porque pretendía pagar, al punto que ese ese valor se incluyó como pasivo en la liquidación de la sociedad conyugal.

Para resolver en concreto, el Juez recordó que se está ante tres pagarés que reúnen todos los requisitos legales, en tanto contienen obligaciones claras, expresas y exigibles, lo que hace al demandado deudor de las sumas cuyo pago se ordenó en el auto de apremio. Luego, el Juzgador entendió que el caso debía resolverse teniendo en cuenta que los títulos valores tienen las características de incorporación, autonomía y literalidad, con base en los cuales el artículo 782 del Código de Comercio reconoce acción cambiaria al tenedor.

Pero, se preguntó: ¿qué ocurre cuando hay oposición?, a lo cual respondió que en virtud de la libertad probatoria cualquier medio de convicción es admisible, pero hay casos en los que se regula forma de probar, por ejemplo, el contenido en el artículo 624 del Código de Comercio según el cual se requiere exhibición del título y, si este es pagado, debe ser entregado a quien pague, salvo pago parcial en cuyo caso debe dejarse constancia en el cuerpo del documento, pero nada de ello tiene lugar en este evento.

Entonces, para el *a-quo* los pagarés son suficientes para despachar negativamente las excepciones, pero la garantía constitucional de la defensa obliga a realizar un análisis más profundo, particularmente porque el demandado alega excepciones vinculadas con el negocio causal, esto es, el contrato de prestación de servicios educativos que en realidad no podía terminarse de forma unilateral. Dijo al respecto el Juez que no podía desconocer la plurimencionada comunicación de julio de 2019, aclarando que de ella no podía concluir un acuerdo entre las partes para dar por terminado el contrato de prestación de servicios, al punto que el representante legal del Liceo explicó el trámite que debe llevarse a cabo en esos casos, amén que el señor Salim en su interrogatorio dijo que para julio de 2019 no tenía otra alternativa de estudio para sus hijos, por lo que ciertamente sus tres hijos continuaron vinculados a la institución, y cubrir los costos de ello es una de sus obligaciones como padre.

Finalmente, el Juez terminó su motivación apuntando que en este caso lo que se observa de fondo es un conflicto matrimonial que impide una correcta comunicación, especialmente sobre la forma de continuar con el proceso educativo de los hijos, y por eso es que estos siguieron vinculados al colegio demandante y siguen sujetos al contrato de servicios educativos, para cuya garantía se firmaron los pagarés que se están cobrando, en tanto que el señor Salim nunca solicitó su devolución y tampoco se preocupó por formalizar la alegada terminación.

## **IMPUGNACIÓN**

Inconforme con la decisión la parte demandada se alzó en su contra, alegando como reparos concretos los que pasan a individualizarse (en audiencia)

**PRIMERO:** *"(...) no se dio ... la debida valoración al material probatorio... se está desconociendo la manifestación de la voluntad de una de las partes en cuando al negocio causal que fue celebrado".*

**SEGUNDO:** *"se le está trasladando al demandado una obligación que él se encontraba en la imposibilidad de cumplir ... como fuera entonces obligar a que los niños fueran retirados del colegio, lo cual no dependía de él sino exclusivamente de su señora madre, y segundo, que le fueran devueltos los pagarés, los cuales tampoco dependía de él ".* Se probó la manifestación de dar por terminado el negocio causal, que fue aceptada cuando se hizo la devolución de los dineros. El demandado al día de hoy ni siquiera puede ver a los hijos, la decisión no es acertada por el hecho de que los hijos continúen en la institución educativa, porque además hubo fijación de cuota alimentaria en la que se estipuló que los menores debían ser trasladados a un colegio acorde con las capacidades económicas del padre.

## **DE LA SUSTENTACIÓN EN ESTA INSTANCIA (LEY 2213)**

El recurso de apelación fue admitido mediante auto fechado el 1º de diciembre de 2022. Dentro del término a que se refiere el artículo 12 de la ley 2213, se allegó memorial radicado el 12 de diciembre para sustentar la alzada, con constancia sobre el efectivo agotamiento del trámite previsto en el parágrafo del artículo 9º de la ley *ibídem*.

En el mentado memorial, el apelante recordó que la ejecución se inició con base en unos pagarés cuya promesa de pagar fue revocada, pues

*"Conforme fue acreditado no solo documentalmente, sino además conforme lo manifestó el representante legal de la entidad demandante, el aquí demandado revocó la promesa contenida en dicho documento e inclusive manifiesta dicho representante, que desconoce porque en su momento no se dio el alcance correspondiente a la solicitud de terminación del padre de familia, solicitud que además fue aceptada por dicho colegio en respuesta que fuera proferida posterior a la notificación de la decisión de terminar el contrato educativo.*

*Llama poderosamente la atención que inclusive luego de que el representante legal de la institución educativa aceptara que el padre de los menores efectivamente terminó el proceso de matrícula y así lo hizo saber al colegio, dicha institución hubiera continuado prestando los servicios educativos sin haber diligenciado nuevamente los documentos, es decir por su progenitora, quien de manera radical y sin considerar la imposibilidad del padre de familia de sufragar los gastos, decidió que los menores continuaran en dicha institución, evento ante el cual conforme declaró el señor Fernando Andrés Ramirez: "el colegio debió hacer un cambio de deudor", cambio que como evidentemente ocurrió, no se hizo"* (fl 1 pdf 06 segunda instancia)

Insistió, entonces, que la institución educativa demandante siempre estuvo enterada de los diferentes conflictos de la familia Zakzuk, en especial de la cuota alimentaria fijada a cargo del demandado por el Juzgado Séptimo de Familia de esta ciudad, en la que se incluyó el pago de un *"el equivalente en dinero a los gastos que genera el Colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana, más no del colegio demandante, y pese a pagar oportunamente y en cada momento la cuota a la madre de los menores, se desconoce si esta hace al colegio el pago correspondiente"* (ibídem). A tal punto fueron así las cosas, que

*"(M)ediante correo electrónico enviado a la dirección TESORERÍA@LF.COM.CO el día 30 de julio de 2019 a las 11:19 horas, el señor SALIM MUNIR ZAKZUK DAGUER en un mensaje que denominó*

*"DEVOLUCIÓN MATRICULA", notificó a la institución educativa en su calidad de padre y responsable de los pagos de los menores, que no continuaría con el proceso de matrícula de sus hijos, al paso que solicitó el reembolso de los valores que para ese momento fueron debitados de su tarjeta de crédito" (fl 2 ibídem).*

Luego, teniendo en cuenta que el dinero debitado fue efectivamente devuelto, para este caso debió reconocerse que el negocio causal terminó y así debió ser declarado con base en lo preceptuado en el numeral 12 del artículo 784 del Código de Comercio. Cosa diferente fue que la señora madre de los menores decidiera continuar educando a los menores en el colegio demandante, para lo cual *"por un error en el procedimiento administrativo como lo reconoció el representante legal, el colegio no suscribió de nuevo los documentos educativos con la madre como debió hacerlo, siendo así como ante la ausencia de pago, dicho colegio optó por usar los pagarés INEXIGIBLES que había firmado el padre de familia, no habiendo demandado a la madre y quien vinculó de nuevo a los menores al colegio, porque esta no había firmado dichos documentos" (fl 4 ibídem).*

De modo que el demandado no tenía opción alguna para evitar la continuidad de los menores en el colegio, quien con mala fe inició la presente demanda en su contra porque no contaba con documento alguno que respaldara la obligación adquirida por la madre.

**La parte demandante guardó silencio.**

## **PROBLEMAS JURÍDICOS**

De acuerdo con lo decidido y argumentado por el juzgador de Primer Grado, y teniendo en cuenta los reproches del apelante, de la siguiente manera pueden plantearse los problemas jurídicos que debe abordar la Sala en esta ocasión:

¿en realidad debió cesar la ejecución por estar probada la "terminación del negocio casual", como lo alega el apelante? O, por el contrario, como lo concluyó el juzgador de primer grado, ¿debe ordenarse la prosecución de esta por ser el demandado deudor de las obligaciones ejecutadas?

Responder ese problema, para efectos de precisión, implica determinar

¿en qué consisten las excepciones derivadas del negocio causal?

¿está probado que entre las partes no existe negocio causal alguno que justifique los valores ejecutados?

Agotado el trámite correspondiente al recurso, corre la oportunidad de resolverlo y a ello se procede con base en las siguientes,

## **CONSIDERACIONES**

### **1. De las excepciones relativas al negocio causal**

En los títulos valores -en este caso pagarés- viene a ser la relación subyacente el negocio jurídico originario o fundamental que motiva su creación, causa que desde luego debe ser real y lícita. No otra cosa se infiere del contenido de los artículos 619 y 620 del C. de Co., cuando expresan, en su orden, que los títulos valores *"son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora"*, y que la ausencia de uno cualquiera de sus requisitos *"no afecta el negocio jurídico que dio origen al documento o al acto"*.

Es decir, el negocio jurídico que da origen a los títulos valores *"obedece a la idea de una contraprestación económica, ora de un mero animus donandi, o ya, en específicas hipótesis como la de la denominada 'firma a favor'"*.<sup>1</sup>

Al amparo de esta orientación, se puede concluir que en los instrumentos cambiarios su creación está precedida de un negocio jurídico subyacente, al margen inclusive que ese motivo sea de cariz oneroso o no. De ahí entonces que le corresponda al obligado cambiario demostrar que el título que se presenta para el cobro no posee una causa real.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional, ha dicho:

---

<sup>1</sup> Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 9 de abril de 2010.

*"Es evidente que la prosperidad de la excepción fundada en el negocio causal o subyacente tiene efectos directos en la distribución de la carga probatoria en el proceso ejecutivo: si el deudor opta por hacer oponibles asuntos propios del negocio subyacente, le corresponderá probar (i) las características particulares del mismo; y (ii) las consecuencias jurídicas que, en razón a su grado de importancia, tienen el estatus suficiente para afectar el carácter autónomo y la exigibilidad propia del derecho de crédito incorporado en un título valor. Como se indicó en el fundamento jurídico de esta decisión, los principios de los títulos valores están dirigidos a garantizar la seguridad jurídica, la certeza sobre la existencia y exigibilidad de la obligación y la posibilidad que el crédito incorporado sea susceptible de tráfico mercantil con la simple entrega material del título y el cumplimiento de la ley de circulación. En consecuencia, si el deudor pretende negar la exigibilidad de la obligación cambiaria, deberá demostrar fehacientemente que la literalidad del título se ve afectada por las particularidades del negocio subyacente. Así, toda la carga de la prueba se impone exclusivamente al deudor, al ejecutado que propone la excepción.<sup>2</sup>"*

Para concluir este aparte, valga citar el artículo 784 del C. de Co., cuyo numeral 12 contempla, como excepciones oponibles frente a la acción cambiaria *"(L)as derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título, contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa"*, a la vez que el numeral 13 ib. permite plantear *"(L)as demás personales que pudiere oponer el demandado contra el actor."*

## **CASO CONCRETO PARA TODOS LOS REPAROS CONCRETOS**

La Sala ha decidido abordar todos los reparos de manera conjunta porque todos ellos apuntan a un solo fin: que la sentencia sea revocada para que, en su lugar, se ordene cesar la ejecución porque a juicio del apelante los pagarés base de recaudo no son exigibles, en la medida que se extinguió el negocio

---

<sup>2</sup> Corte Constitucional. Sentencia del T-310 de 2009.

causal que los soportaba. Ahora, bien se sabe que el segundo reparo versa sobre la "imposibilidad del padre" de cumplir con el retiro físico de los menores del colegio, amén de lograr la devolución de los pagarés porque ninguno de esos eventos estaba dentro de su órbita de control.

Pues bien, para resolver la Sala debe comenzar por aclarar que siendo el presente proceso uno de ejecución soportado en algunos pagarés, los hechos vinculados con el negocio causal importan siempre que se orienten a la modificación o extinción del acuerdo que en su momento les dio origen. Esto se aclara porque el contrato original celebrado por las partes es uno de aquellos que típicamente se suscribe para la prestación de servicios educativos, por lo que a la demandante ello es lo único que le concierne especialmente porque ningún conflicto entre los padres de familia tiene, en principio, virtud para afectar la obligación que uno de ellos, o los dos, adquirieron al momento de formalizar el proceso de matrícula de sus hijos.

Dicho esto, está claro que entre el señor demandado y su excónyuge se presentaron diferentes conflictos que los llevaron a la finalización de su matrimonio por la vía judicial. Empero, los acuerdos a los que llegaron en esos procesos para la manutención de sus hijos, la partición de su patrimonio y el pago de las deudas, en realidad resultan incidiendo en el presente cobro ejecutivo, pero en contra de los intereses del apelante según pasa a explicarse.

El señor Salim desde el inicio de su intervención procesal ha insistido en que

*"(M) mediante correo electrónico enviado a la dirección TESORERÍA@LF.COM.CO el día 30 de julio de 2019 a las 11:19 horas, el señor SALIM MUNIR ZAKZUK DAGUER en un mensaje que denominó "DEVOLUCIÓN MATRICULA", notificó a la institución educativa en su calidad de padre y responsable de los pagos de los menores, que no continuaría con el proceso de matrícula de sus hijos, al paso que solicitó el reembolso de los valores que para ese momento fueron debitados de su tarjeta de crédito" (escrito sustentación).*

De hecho, la prueba documental aportada con el recurso de reposición que el demandado propuso en contra del mandamiento de pago, deja ver que esos dineros en efecto fueron devueltos (fl 29 pdf 12), lo que haría pensar en que

tanto el colegio como el demandado entendieron que los menores no continuarían su proceso educativo en la institución, si no fuera porque el apelante con su conducta ratificó el negocio causal que soporta los pagarés base de la ejecución, porque con posterioridad a que manifestó su voluntad de dar por terminado el contrato de prestación de servicios educativos, se reunió con las directivas del colegio para buscar alternativas de pago, para lo que pidió el respectivo estado de cuenta, y también incluyó el rubro adeudado como pasivo en la liquidación de su sociedad conyugal entonces disuelta por sentencia judicial.

Nótese, preliminarmente, que el apelante en su interrogatorio manifestó haberse enterado de que sus hijos seguían estudiando en el Colegio apenas en el momento mismo en que inició la audiencia, lo cual de ninguna manera puede ser cierto porque más adelante aceptó haber entablado comunicación con las directivas de la institución para saldar la deuda pendiente. Incluso, aunque aseguró que no había retirado físicamente a sus hijos del Colegio *"por desconocimiento, yo no sabía en qué condiciones estaban los niños... la señora me dijo que había llegado a un acuerdo, que iba a lavar los pisos o algo así ... no tenía idea de que los niños estuvieran matriculados legalmente en el colegio"*(min 33.50), apenas minutos antes había dicho *"para el proceso de liquidación de bienes yo me acerqué al colegio ... en una reunión que estuvo la rectora .... La liquidación me la iban a pasar por correo electrónico... me acerqué sencillamente para incluir eso dentro de la liquidación de bienes"* (min 29:00).

Esa inclusión del pasivo en efecto tuvo lugar, tanto como que mediante sentencia del 11 de mayo de 2022 el Juzgado Trece de Familia de esta ciudad, decidió *"APROBAR en todas sus partes el trabajo de partición y adjudicación presentado el 7 de abril de 2022 por el partidor Hamilton Clavijo Isaza portador@ de la tarjeta profesional número 276.717 del CSJ, dado dentro del proceso liquidatorio de la sociedad conyugal de Salim Munir Zakzuk Daguer y Silvia Liliana Barbuscia"* (fl 35 pdf 12). Ese trabajo de partición aprobado, entre otras cosas, incluyó la siguiente partida en el apartado de pasivos: *"(A) cargo de la sociedad conyugal y a favor del Liceo Francés por concepto de pensión educativa de los hijos D..., F.... y L... Zakzuk Barbuscia, avaluado en \$236'626.936"*.

Recuérdese, entonces, que la diligencia de inventarios y avalúos regulada en el artículo 501 del C.G.P aplicable a eventos en los que se liquida la sociedad conyugal<sup>3</sup>, es la oportunidad para que los cónyuges incluyan u objeten los pasivos. Esa norma preceptúa que *"se incluirán las obligaciones que consten en título que preste mérito ejecutivo, siempre que en la audiencia no se objeten, y las que a pesar de no tener dicha calidad se acepten expresamente en ella por todos los herederos (entiéndase cónyuges en el caso de la liquidación de su sociedad)"*. Ergo, la deuda a favor del Colegio se incluyó por constar en los diferentes títulos valores suscritos por el demandado, o bien por voluntad de ambos cónyuges, pero en todo caso no fue objetada.

De modo que el demandado no puede excusarse en que no sabía si sus hijos estaban estudiando o no en el Colegio, pues de hecho nada de ellos sabía, alegando simple y llanamente que acordó una cuota alimentaria con su excónyuge en la que incluyó una suma para el pago de otra institución educativa de menor valor, pues razonar con esa lógica equivaldría a oponerle a la demandante un acuerdo privado entre los padres de los menores, que en realidad no la involucra.

Siendo así las cosas, aquella "terminación del negocio causal" que el demandado alega con base en la comunicación enviada al señor Juan Naranjo (empleado de la demandante para ese entonces) el 30 de julio de 2019, en la que comunicó la intención de "no continuar con el proceso de matrícula", en realidad no llegó a concretarse en una terminación del contrato de prestación de servicios educativos, ya que el actor con posterioridad se allanó a cumplir con el pago de las pensiones acumuladas, al punto que pidió el estado de cuenta e incluso reconoció la deuda completa en la liquidación de su sociedad conyugal.

Por tanto, los alegatos del recurso no tienen virtud para introducir variantes en la decisión apelada, porque de hecho el mentado señor Naranjo, a quien se le comunicó la intención de terminar el vínculo contractual, para esa época fungía como director financiero según declaró el representante legal de la demandante, lo que implica *"un enfoque más de cobrar cartera, pago de proveedores, estar pendiente de los impuestos ..."* (min 14.00), pero con

---

<sup>3</sup> Véase Tribunal Superior de Medellín, Sala de Familia. Auto 10455 del 8 de junio de 2021. Radicado 05001-31-10-014-2019-00783-01. M.P. Darío Hernán Nanclores Vélez.

respecto a la “desescolarización” de los menores ese mismo representante argumentó en variadas ocasiones *"la solicitud de ninguno de los padres expresa no continuó en el colegio, no la tengo"* (ibídem), porque para esos efectos *"deben acercarse (los padres) a la secretaría del colegio, y exponer el caso donde dicen voy a retirar mi hijo y solicitar el paz y salvo para que con ese documento vayan a otro colegio... tienen que acercarse a secretaría ... a la fecha no tengo solicitud de cancelación"* (min. 7.55).

También en ese interrogatorio que se viene mencionando se ratificó lo que el propio demandado aceptó, esto es, que sostuvo varias comunicaciones con el colegio de cara a cancelar el dinero adeudado por concepto de pensión de sus tres hijos. El representante legal de la demandante y el demandado coinciden, entonces, en que *"lo que se hizo fue buscar, se llamó, se enviaron mensajes... de hecho me reuní con el señor Salim donde le manifesté el saldo que teníamos y me pidió que mandara el valor hasta ese momento, que el iba a hacer una propuesta de pago... posterior a eso vino otra segunda llamada ... no tuvimos respuesta ... ya el colegio lo que hace es que contrato los servicios ... para el cobro de cartera"* (min 2.55)

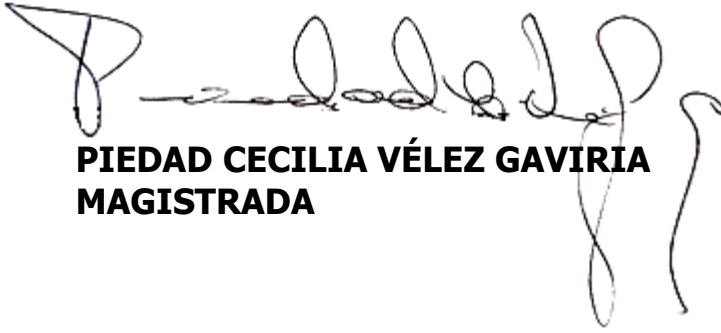
Todo lo anterior lleva a que la Sala confirme la sentencia apelada, porque las tratativas iniciales a través de las cuales el demandado buscó terminar el contrato que dio origen a los títulos valores, desembocaron finalmente en una ratificación del contrato original y en el reconocimiento por parte del demandado de la deuda que por la prestación de los servicios educativos se acumuló a lo largo de los años.

## **DECISIÓN**

La Sala Cuarta de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **CONFIRMA** la sentencia de procedencia y fecha indicadas. **Sin costas** en esta instancia por no aparecer causadas.

Devuélvase el expediente a su origen

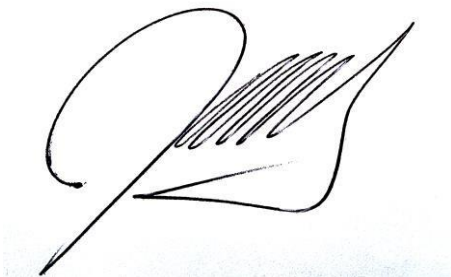
## **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



**PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA**  
**MAGISTRADA**



**JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO**  
**MAGISTRADO**



**JULIÁN VALENCIA CASTAÑO**  
**MAGISTRADO**

Firmas son de la siguiente causa:

**S - 19**

**Procedimiento:** Ejecutivo

**Demandante:** Lycée Francais Medellín S.A.S

**Demandados:** Salim Munir Zakzuk Daguer

**Radicado Único Nacional:** 05266 31 03 002 2022 00114 01

**Procedencia:** Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Envigado

**Decisión:** Confirma providencia apelada

Firmado Por:  
Piedad Cecilia Velez Gaviria  
Magistrada

**Sala 002 Civil**

**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8946628cfc865e910d81722fa883ed30dec213af33130f6252a9b46c9f469999**

Documento generado en 21/02/2023 08:17:03 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**